



DIMENSIONES CONSTITUCIONALES DE LOS DERECHOS HUMANOS EN AMÉRICA LATINA: (III) LIBERTADES DE EXPRESIÓN

ENRIQUE P. HABA
Facultad de Derecho
(Universidad de Costa Rica)

JAIME ESPONDA FERNÁNDEZ
Vicaría de la Solidaridad
(Arzobispado de Santiago de Chile)

SUMARIO

I. SEMÁNTICA CONSTITUCIONAL

	Pág.
(i) Brasil	67
— Principios generales	
— Libertad de prensa	
— Libertad artística	
— Libertad religiosa	
— Síntesis	
(ii) Colombia	68
— Libertad de prensa	
— Libertad de enseñanza	
— Libertad religiosa	
— Síntesis	
(iii) Costa Rica	68
— Principios generales	
— Libertad de prensa	
— Libertad religiosa	
— Libertad de enseñanza	
— Síntesis	
(iv) Cuba	69
— Principios generales	
— Libertad de enseñanza	
— Libertad de conciencia y de cultos	
— Síntesis	
— Discusión	
(v) Chile	71
— Principios generales	
— Libertad religiosa	
— Libertad de enseñanza	
— Libertad de prensa	
— Libertad artística	
— Síntesis	
(vi) Honduras	73
— Libertad de prensa	
— Libertad religiosa	
— Libertad de enseñanza	
— Extranjeros	
— Síntesis	
(vii) México	74
— Principio general	
— Libertad de publicación	
— Libertad de enseñanza	
— Libertad religiosa	
— Extranjeros	
— Síntesis	

(viii) Perú	76
— Disposiciones generales	
— Libertad de enseñanza	
— Síntesis	
(ix) Uruguay	77
— Principios generales	
— Libertad religiosa	
— Libertad de enseñanza	
— Extranjeros	
— Gobierno militar	
— Síntesis	
(x) Venezuela	79
— Principios generales	
— Libertad religiosa	
— Libertad de enseñanza	
— Síntesis	

II. UNA INVESTIGACIÓN DE CAMPO (SOBRE MATERIAL JURISPRUDENCIAL)

1. Hipótesis	81
2. Resultado general	81
3. Impedimento al ejercicio del derecho de opinión	81
4. Represión con posterioridad al ejercicio del derecho, a manera de castigo o sanción por dicho ejercicio	82
4.1. detenciones	
4.2. amedrentamientos	
4.3. otras medidas represivas	
5. Impedir o sancionar la utilización de medios de comunicación	85
6. Conclusión	87
Anexo: Índice analítico del capítulo VIII	88

Nota.

Los dos primeros artículos de esta serie se publicaron respectivamente en los dos números anteriores de la *Revista Judicial*: Números 35 (diciembre 1985, ps. 53-71) y 36 (marzo 1986, ps. 81-100). Reiteramos que debe tenerse en cuenta: a) que este apartado fue escrito, en lo fundamental, durante el segundo semestre de 1983; b) que sus bases teóricas no están aquí, sino desarrolladas a lo largo del capítulo respectivo (cf. acá el Anexo) y en otros lugares de la obra completa; c) que por tratarse de una transcripción literal, hay también remisiones a sitios de aquella que no se hallan en el artículo; d) y por el mismo motivo, las notas comienzan con la número 46. Lo que se recoge en notas bajo el título de *Comentario*, y también la *Discusión* incluida en el apartado referente a Cuba, se extrae de intervenciones orales que tuvieron lugar en la Segunda Reunión Regional de Expertos (San José de Costa Rica, 22-26 de agosto de 1983) del Proyecto de Investigación al cual corresponde este trabajo (cf. la *Nota* que está al comienzo del primer artículo de la serie), efectuadas por: Wálter ANTILLÓN MONTE-ALEGRE (ex Catedrático de la Universidad de Costa Rica), Allan R. BREWER-CARÍAS (Universidad Central de Venezuela), Domingo GARCÍA BELAÜNDE (Universidad Católica de Lima), Daniel O'DONNELL (Comisión Internacional de Juristas), Rodolfo PIZA ESCALANTE (Corte Interamericana de Derechos Humanos).

La Parte I es de Enrique P. HABA. La Parte II está conformada por el Apéndice de un trabajo preparado por Jaime ESPONDA FERNÁNDEZ para el mencionado Proyecto de Investigación, trabajo titulado: *La protección del derecho de opinión en la Constitución Política. Análisis comparado de las constituciones de Chile, México y Perú*, Santiago de Chile, 1983, 66 págs.

I. SEMÁNTICA CONSTITUCIONAL

(i) BRASIL

Principios generales. Se establece, como pauta de principio, la libertad en general para toda clase de pensamientos: "É livre a manifestação de pensamento, de convicção política ou filosófica" (art. 153.8 *in limine*). E incluso se agrega: "Por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, ninguém será privado de qualquer dos seus direitos" (art. 153.6 *in limine*). Por lo demás, como para los derechos individuales en general, la "inviolabilidad" de aquellos se "assegura aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País", sin establecer distinción alguna entre ellos (art. 153 *in limine*).

Continuación. Pero toda esa liberalidad no es más que aparente, pues de inmediato la Constitución se encarga, en esos mismos preceptos y también en otros, de introducir una serie de limitaciones en la materia. Así, por ejemplo, en el artículo (citado) donde se dice que a nadie se privará de sus derechos por razón de sus convicciones, desde ya se agrega: "salvo se o invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta, caso em que a lei poderá determinar a perda dos direitos incompatíveis com a escusa de consciência" (art. 153.6 *in fine*). Por sobre cualquier otra cosa, como un

límite de orden absolutamente general, está lo concerniente a la seguridad nacional (cf. *supra*, cap. III: Ap., i). Recuérdese que todas las personas son "responsável pela segurança, nos limites definidos em lei" (art. 86). Y a tal punto es esto así, también en lo relativo a la exteriorización de pensamientos, que hasta los parlamentarios pierden su inviolabilidad en el caso de que "suas opiniões, palavras e votos" constituyan un "caso de crime contra a segurança nacional" (art. 32 *in limine*). Dentro de ese marco, el de la suprema razón que representa siempre el cuidado de la "segurança nacional", habrá que ubicar la posibilidad del ejercicio de todas y cada una de las libertades de expresión, sin perjuicio de otros varios motivos de limitaciones.

Libertad de prensa. Se dice que es libre "a prestação de informação independentemente de censura. . . respondendo cada um, nos termos da lei, pelos abusos que cometer. É assegurado o direito de resposta. A publicação de livros, jornais e periódicos não depende de licença de autoridades" (art. 153.8). Hasta aquí, como se ve, no se hace sino reafirmar, con más detalle, el principio general de libertad que señaláramos al comienzo. Pero a continuación se establece que todo ello puede ser prohibido, con base en una serie de conceptos

indeterminados: "Não serão, porém, toleradas a propaganda de guerra, de *subverção da ordem* ou de preconceitos da religião, de raça ou de *classe*, e as publicações e exteriorizações contrarias à *moral* e aos *bons costumes*" (*loc. cit., in fine*).

Libertad artística. Con respecto a esta, en lo que particular relación dice con las "diversões e espetáculos públicos", se subraya que —a diferencia de lo que como principio (al menos) se señala respecto a la libertad de información (*vid.* el par. anterior, *in limine*)— allí cabe la "censura" (art. 153.8 *in limine*).

Libertad religiosa. Le está vedado a los órganos estatales el "establecer cultos religiosos ou igrejas, . . . embaraçar-lhes o exercício", etc. (art. 9.II). Se fija como principio la libertad de conciencia y de cultos, con la sola salvedad de que estos "não contrariem a *ordem pública* e os *bons costumes*" (art. 153.5). *Vid.* también lo relativo a la "escusa de consciência", que *no* se podrá "invocar para eximir-se de obrigação legal" (art. 153.6, transcrito *supra*); y la referencia a que no será tolerada la "propaganda. . . de *preconceitos da religião*" (art. 153.8, citado *supra*).

En síntesis. Aunque la Constitución brasileña contiene unas afirmaciones de principio favorables a la libertad de expresión del pensamiento en sus distintas manifestaciones, ello no le impide autorizar, por la vía de una serie de conceptos indeterminados y sobre todo mediante el privilegio general concedido a la "segurança nacional", que a esa libertad le sean introducidas toda clase de limitaciones, en la medida en que las autoridades lo juzguen oportuno.

(ii) COLOMBIA

Libertad de prensa. El texto constitucional establece esta libertad, "pero responsable, con arreglo a las leyes, cuando atente a la *honra* de las personas, el *orden social* o la *tranquilidad pública*" (art. 42.1). Aunque tal responsabilidad queda sometida a esos tres conceptos indeterminados, de los cuales son más peligrosos los dos últimos, dicha disposición tiene la ventaja de no señalar otros; por ejemplo; no habla de "moral" o "seguridad". Sobre todo, cabe señalar que el hecho de referirse solo a la "responsabilidad", parece indicar que no

cabría censura previa; por lo menos, no hay ninguna referencia expresa a que esta sea admisible.

Libertad de enseñanza. Ella se "garantiza", pero confiándosele al Estado "la *suprema* inspección y vigilancia de los institutos docentes, públicos y privados, en orden a procurar el cumplimiento de los fines sociales de la cultura y la *mejor* formación intelectual, moral y física de los educandos" (art. 41.1). Estos conceptos indeterminados, en que ha de basarse la "vigilancia" estatal, desde luego que podrían ser interpretados de una manera peligrosa. Sin embargo, cabe reconocer que antes bien ellos tienden a no ser de los que más frecuentemente dan pie a las interpretaciones restrictivas.

Libertad religiosa. Si bien se reconoce, en principio, la libertad de opiniones religiosas y de cultos (art. 53.1), el precepto constitucional contiene unos giros que son muy peligrosos. En efecto, dicha libertad se garantiza *solo* para aquellos "cultos que no sean contrarios a la *moral cristiana* ni a las *leyes*" (art. 53.2). Esto permitiría, prácticamente, prohibir cualquier culto que no sea del agrado de las autoridades de la religión cristiana predominante. Por lo demás, "contrario. . . a las leyes" puede ser cualquier cosa, con solo que las leyes establezcan, precisamente, lo contrario de esa cosa; de modo que, según este pasaje, las leyes podrían llegar a prohibir *cualquier* manifestación religiosa que no fuera del agrado de una mayoría parlamentaria.

En síntesis. La Constitución colombiana es parca con respecto a la libertad de expresión, pero no le impone, en general, restricciones graves. En materia de libertad de cultos, sin embargo, el texto constitucional la garantiza de una manera muy endeble, sobre todo para los no cristianos.

(iii) COSTA RICA

Principios generales. La libertad de opinión se encuentra afirmada de la manera más amplia, como principio general: "*Nadie* puede ser inquietado ni perseguido por la manifestación de sus opiniones" (art. 28 *in limine*). No obstante, el inciso final del mismo precepto priva de ese derecho humano, si se trata de ejercerlo como "propaganda política", a cualquiera ("clérigos o seglares") que la haga

"invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, de creencias religiosas". Esta restricción atenta tanto contra la libertad de expresión del pensamiento en materia política como religiosa. Por otro lado, también se restringe la libertad de opinión para los extranjeros (sean o no residentes), pues a ellos les está vedado "*intervenir* en los asuntos políticos del país" (art. 19.2 *in limine*); claro que el término "*intervenir*" se puede interpretar de una manera más amplia o más estrecha, y en este segundo caso se referiría solo a la posibilidad de elegir y ser elegido para cargos públicos, no a la libertad de expresión del pensamiento.

Libertad de prensa. Se consagra, para "todos", la libertad de comunicar sus pensamientos, de palabra o por escrito, y publicarlos *sin* previa censura; pero queda aclarado que "serán responsables por los abusos que cometen. . . , en los casos y del modo que la *ley* establezca" (art. 29). En cuanto a esos "abusos", pues, la ley tiene entera libertad para establecer lo que sea; y un caso de "abuso" podría ser, evidentemente, el publicar que la religión tiene algo que "decir" en materia política o si es un extranjero quien difunde algo concerniente a esta (*vid.* el par. anterior).

Libertad religiosa. Se establece que "la Religión Católica, Apostólica, Romana es la del Estado", aunque no se impide la práctica de otros cultos. Mas estos deberán ser tales "que no se opongan a la *moral universal* ni a las *buenas costumbres*" (art. 75); sin embargo, es posible que estos dos conceptos indeterminados no lleguen a revestir aquí mayor riesgo, en la práctica, para las otras religiones.

Libertad de enseñanza. También esta se garantiza, pero siempre "bajo la *inspección* del Estado" (art. 79). No están determinados los criterios ni los alcances que pueda tener tal inspección, referida a "*todo* centro docente privado"; pero el contexto de la Constitución —por ejemplo, el que haya una disposición según la cual el Estado deberá dar "estímulo" a la iniciativa privada en materia educativa (art. 80)— hace pensar que la intervención estatal no podría ser una que, por razones ideoló-

gicas, *impida* llevar a cabo esa enseñanza. Por otro lado, esta Constitución tiene el mérito de señalar en forma expresa que: "La libertad de cátedra es principio *fundamental* de la enseñanza universitaria" (art. 87).

En síntesis. Tampoco la Constitución costarricense, análogamente a la colombiana, presenta un número alto de restricciones a la libertad de expresión. Sobre esta última tiene la ventaja, aún, de que sus textos sobre la libertad de cultos y la de enseñanza son menos peligrosos. Sin embargo, trae una injustificable restricción en materia de opiniones políticas ligadas a materia religiosa y también respecto a la libertad de palabra de los extranjeros.⁴⁶ Tiene el mérito, en cambio, de prohibir toda censura previa de publicaciones, sin perjuicio de que ellas quedan ulteriormente sometidas a responsabilidad en función del indeterminado concepto de "abuso".

(iv) CUBA

Principios generales. De acuerdo a algunas de las disposiciones constitucionales, podría parecer que la libertad de expresión se halla establecida de la manera más amplia: "Las organizaciones sociales y de masas disponen de todas las facilidades para el desenvolvimiento de dichas actividades [derechos de reunión, manifestación y asociación] en las que sus miembros gozan de *la más amplia libertad de palabra y opinión*, basadas en el derecho *irrestringido* a la iniciativa y a la crítica" (art. 53); "la libertad de discusión, el ejercicio de la crítica y autocrítica. . . rigen en todos los órganos estatales colegiados" (art. 66.g).

Continuación. Pero todo eso no es más que aparente (ni siquiera puede decirse que tal "libertad" se autoriza como excepción), ya que otras disposiciones se encargan de señalar, en la forma más inequívoca, cuáles son los límites para *todas* las "libertades" constitucionales. En efecto, y tal vez en un grado todavía mayor que los restantes derechos individuales, la libertad de expresión se halla afectada —prácticamente eliminada— por

46. Pero *vid.* el comentario de ORTIZ, quien considera, por el contrario, que dichas restricciones son perfectamente admisibles: *supra*, §§ 11. IV *in fine* y 75. III *in limine*. [Dicho comentario pertenece a un trabajo del Lic. Eduardo ORTIZ ORTIZ, que será publicado también en la presente serie, como artículo que la cerrará: *Dimensiones constitucionales*. . . VI.]

el precepto constitucional que establece la prohibición de ejercer cualquier libertad si ello va "contra la decisión del pueblo cubano de construir el socialismo y el comunismo" (art. 61); una "decisión" cuyo contenido se encargan de establecer, en cada caso, las autoridades estatales, según los criterios que señale oportunamente el Partido Comunista (art. 5). Esta misma concepción de lo que es "libertad" se encuentra subrayada al señalarse, por ejemplo, que solo hay "libertad de palabra y prensa *conforme* a los fines de la sociedad socialista" (art. 52 *in limine*).

Continuación. Recuérdese que ese Estado "basa su actividad y educa al pueblo en la concepción científica [sic] materialista del universo", estando guiado "por la doctrina victoriosa del marxismo-leninismo" (Preámbulo); todo ello de manera tal que "la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado" es el Partido Comunista (art. 5). No será otro que este, pues, quien decida cuándo los ciudadanos se expresan o no "conforme a los fines de la sociedad socialista", es decir, hasta dónde alcanzará la "libertad de palabra y prensa" (art. 52) de aquellos. Lo propio ocurre con la creación artística, la cual "es libre... siempre que su contenido *no sea contrario* a la Revolución" (art. 38.d).

Libertad de enseñanza. En lo que especifica relación dice con esta libertad, ella es prácticamente nula: "La enseñanza es función del Estado" solamente, y este "fundamenta su política educacional y cultural en la concepción científica [sic] del mundo, establecida y desarrollada por el marxismo-leninismo" (art. 38, incs. a y b); en particular, la niñez y la juventud tienen que ser educadas "en el espíritu comunista" (art. 39.1; cf. también art. 6). O sea, que no se puede enseñar sino lo que acepte el "marxismo-leninismo", de acuerdo con la interpretación que de este decreto como obligatoria la alta dirigencia del Partido Comunista.

Libertad de conciencia y de cultos. Se la "reconoce y garantiza", siempre y cuando los cultos tengan lugar "dentro del respeto a la ley", la cual "regula las actividades de las instituciones religiosas" (art. 54, incs. 1 y 2). De todos modos, está prohibido "oponer la fe o la creencia religiosa a la *Revolución*" —es decir, a los dogmas del Partido Comunista— y, en general, a todos "los deberes establecidos por la Constitución" (art. 54.3).

En síntesis. La Constitución cubana reconoce como ámbito de la libertad de expresión, fuera de lo que el Partido Comunista juzgue irrelevante, solamente la difusión de los dogmas que dicho Partido señale como contenido del llamado "marxismo-leninismo" o aquello que sus dirigentes admitan como compatible con este. La religión es aceptada en la medida en que no cuestione dichos dogmas, ni obstaculice en manera alguna lo que tengan a bien ordenar las autoridades de ese Partido.

Discusión.

ANTILLÓN:

El Redactor dice que no está, prácticamente, garantizada la libertad de expresión en Cuba. Mas en Cuba es frecuentísimo, por ejemplo, el uso de los medios de comunicación colectiva por parte de individuos y por parte de grupos u organizaciones colectivas. Es frecuentísimo y es cotidiano. Y el uso de la crítica y la autocritica —por ejemplo, en los consejos de fábrica, en los establecimientos públicos, en los ministerios— también es una norma que se mantiene, que se aplica y que se perfecciona. Yo pienso que esas son formas, precisamente, de la libertad de opinión y de expresión de los ciudadanos. Y son formas efectivas de ejercer el poder por parte de las bases. Hay una participación, no solo expresando opiniones, sino también incluso tomando las decisiones, en los niveles que les corresponden. Solo que el sistema, la organización, de la Constitución cubana es bien diferente a las otras —pienso que la reflexión vale no solo para esto, sino en general—. Y entonces, lo que hay que hacer es meterse dentro de su lógica, y no aplicarle la lógica de las Constituciones tradicionales.

O'DONNELL:

El proceso de crítica y autocritica es una manera de 'implementar' la libertad de expresión, pero está muy lejos de ser una 'implementación' completa de lo que se entiende por libertad de expresión. La 'implementación' de la libertad de expresión es un problema que tiene características muy particulares en Cuba, donde hay un monopolio de la economía por el Estado; donde uno tiene que conseguir, por ejemplo, permiso para importar libros; y donde los medios de protección, incluso de publicación, están en manos del Estado, o de entidades estatales como el ejército, etc.

HABA:

En cuanto a eso de que hay que "meterse dentro de la lógica del sistema", es una afirmación que tiene dos caras: una que puedo compartir y otra no. ¿Qué significa "meterse dentro de la lógica del sistema"? Si significa que uno debe entender la Constitución de Cuba dentro

del marco global de cómo está funcionando la sociedad cubana, estoy de acuerdo. Pero si "meterse dentro de la lógica del sistema" significa tanto como *aceptar* el sistema, consentirlo en una forma acrítica, ese punto de vista no lo comparto.

PIZA:

Estoy de acuerdo en que cada sistema político exige una determinada lógica acorde, digamos, con los criterios básicos del sistema. Pero lo que ocurre es que, a mi juicio, hay una ideología de los derechos humanos que es única, que es universal, que ha sido aceptada universalmente y, por lo menos para nosotros, es el único término de referencia posible. Y esa ideología implica su propia lógica, exige determinadas condiciones. Esto establece un equilibrio de derechos y una serie de principios que no se pueden abandonar. Uno de ellos es que no es posible privilegiar unos derechos en detrimento de otros. Decía RUBIO* que el problema es que los países occidentales privilegian los derechos civiles y políticos, mientras que los países socialistas privilegian los derechos económicos y sociales. Sin embargo, yo noto una diferencia. Cuando examinamos los sistemas occidentales, inclusive quienes nos inscribimos dentro de la lógica de los países occidentales hacemos críticas tremendas a nuestros propios sistemas. En cambio, generalmente, cuando se analizan sistemas socialistas no aparecen los males del sistema; todo está bien, todo resulta maravilloso.

A mí me preocupa, en el caso cubano, que, de manera semejante a otros regímenes (también del otro signo), los derechos resultan, en realidad, puramente programáticos. Los derechos se definen, incluso muy hermosamente, y algunas realidades corresponden a esas definiciones. Pero los mecanismos de garantías, objetivos y universales, no existen: universales, esto es, al alcance de todo el mundo y para defender cualquier cosa. El condicionamiento de los derechos, por ejemplo, a la construcción de la sociedad socialista, o al mantenimiento de un determinado tipo ideológico o político, es, para mí, una seria limitación de los derechos. Yo, en mi país, tengo derecho a ser comunista. Tengo derecho a querer cambiar totalmente el sistema; y puedo reclamar, exigir mi derecho, aunque ese derecho vaya en contra del sistema mismo. En cambio, en Cuba —en Nicaragua tampoco, y en ninguno de esos países— no hay esa posibilidad, no hay la posibilidad de reclamar derechos humanos que son inherentes a la persona humana. Aquí, yo le puedo decir al Presidente que es corrupto. Posiblemente, si no tengo pruebas, me puedan condenar por calumnia;

pero si demuestro que lo hice en interés del bien público, aunque yo haya dicho una mentira y no la pueda probar, salgo absuelto. Creo que este es el meollo de los derechos humanos, por ejemplo, en el caso cubano: la definición en función de un determinado tipo de sociedad, en función de un determinado régimen político; y la falta de mecanismos absolutamente objetivos y confiables, para que todo ser humano, inclusive el peor enemigo del régimen, exija sus derechos.

ANTILLÓN:

En cuanto a la "lógica del sistema" que plantea PIZA, yo estoy de acuerdo con él. Lógica del sistema, no puede significar relativizar los derechos fundamentales; de ninguna manera. Lo que significa, simplemente, es que permite entender una manera diferente de tutelar esos derechos; no la negación del derecho. Y en ese sentido, los países socialistas son muy claros, justamente, en reconocer declaraciones universales de los derechos. Los hombres somos los mismos, en el mundo socialista y en este mundo, y tenemos los mismos derechos. Solo que hay dos modos, dos tipos de mecanismos: los socialistas pensamos que los mecanismos del mundo socialista son mejores, y otras personas piensan de manera diferente.

(v) CHILE

Principios generales. En forma análoga a la Constitución de Cuba, también la chilena expresa sin ambages que no se tolerará ninguna ideología que discrepe de aquello que los gobernantes establecen como dogmas intocables: "Todo acto de persona o grupo destinado a propagar doctrinas que *atenen* contra la familia, propugnen la violencia o una *concepción* de la sociedad, del Estado o del orden jurídico, de carácter *totalitario* o fundada en la lucha de clases, es ilícito" (art. 8.1). Esta disposición se encuentra reforzada aun por otros conceptos indeterminados, a los que todo chileno tiene el "deber fundamental" de ajustar su conducta: el de "honrar a la *patria*, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la *seguridad nacional* y los *valores esenciales* de la tradición chilena" (art. 22.2).

Continuación. En ambas Constituciones el resultado es similar, en cuanto a imponerle las más

* Referencia a una intervención previa de Marcial RUBIO CORREA, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

severas vallas dogmáticas a la posibilidad de expresarse. Lo que varía, de una a otra, es simplemente cuáles son los pensamientos prohibidos, no el carácter de "color" *único* de las ideas que se permite exteriorizar ni el carácter "herético" de las que no concuerden con aquel. Si en la Constitución cubana los dogmas aparecían introducidos por medio de términos como "socialismo", "marxismo-leninismo", "traición a la patria", etc., los dogmas propios de la chilena se introducen de las dos maneras siguientes. Por vía negativa, con la ayuda de expresiones como: "atenten contra la familia", "carácter totalitario", etc. O bien, por vía positiva, mediante fórmulas como: "honrar a la patria", "valores esenciales de la tradición chilena", etc. Solo se autoriza la circulación de las ideas que no juzguen inaceptables —esto es, "totalitarias" o vinculadas a estas— quienes tienen el monopolio para decidir qué "concepciones" son legítimas y cuáles no: la o las autoridades gobernantes. Dentro de ese cuadro, o sea, sobre la base de que solo se puede decir aquello que las autoridades no consideren "atentatorio" contra sus dogmas, se inscribe cada uno de los subtipos de la libertad de expresión: religiosa, de prensa, artística, de enseñanza, etc.

Libertad religiosa. Se admite "la manifestación de todas las creencias y el ejercicio libre de todos los cultos que no se opongan a la *moral*, a las *buenas costumbres* o al *orden público*" (art. 19.6.1). Esos tres conceptos indeterminados resultan de lo más peligrosos, por sus virtualidades restrictivas, en el contexto de esta Constitución precisamente, sobre todo habida cuenta del principio general de limitación ideológica establecido en el artículo 8 (*vid. supra*). Pero incluso suponiendo que los términos "moral" y "buenas costumbres" no fueran interpretados de una manera demasiado estrecha, o sea, que no se les diera un alcance más limitativo que el corriente en países de organización política liberal, aún quedaría a mano el concepto de "orden público", el cual resulta siempre cómodo para justificar las restricciones que un Estado quiera imponer. Por esta vía, bien se puede entender que la actividad religiosa, como cualquier otra, debe ajustarse a los dogmas ideológicos señalados y, más exactamente, a la interpretación que de estos establezcan los gobernantes. Igual que en Cuba, la libertad religiosa queda limitada a aquello que las autoridades consideren inofensivo para la ideología estatal o, mejor

todavía, si la prédica religiosa sirve para apoyar esa ideología.

Libertad de enseñanza. Con esta ocurre algo similar a lo indicado respecto a la libertad religiosa. Se señala que ella "no tiene otras limitaciones que las impuestas por la *moral*, las *buenas costumbres*, el *orden público* y la *seguridad nacional*" (art. 19.11.2). Ya se sabe lo que pueden significar, aquí, estos cuatro conceptos indeterminados; sobre todo, los dos últimos. Por lo demás habrá una "ley orgánica constitucional" que regulará "la enseñanza básica y media" (art. 19.11.5). Cabe pensar que será en tal ley donde estarán consignadas, entre otras cosas, las restricciones a la libertad de enseñanza —de acuerdo con aquellas "limitaciones" y, en general, con los dogmas del Estado— para evitar toda eventual desviación respecto al adoctrinamiento en la ideología oficial.

Libertad de prensa. Se encuentra presentada en términos muy amplios: es "sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio" (art. 19.12.1). Hasta se establecen algunas garantías en la materia: "prohibición de monopolio estatal sobre los medios de comunicación" (art. 19.12.2), protección de los particulares mediante el derecho de respuesta (art. 19.12.3) y el delito de injuria (art. 19.4.2), etc. Pero aunque las disposiciones mencionadas no son restrictivas, sino lo contrario, las limitaciones pueden introducirse, por ejemplo, mediante ley. Es esta quien señalará las "*condiciones*" para "editar y mantener diarios, revistas y periódicos", como también ella determinará *quiénes* "podrán establecer, operar y mantener estaciones de televisión" (art. 19.12, incs. 4 y 5); asimismo, "un Consejo Nacional de Radio y Televisión" ha de ser el "encargado de velar por el *correcto* funcionamiento de estos medios" (art. cit., inc. 6). Y habida cuenta de las disposiciones mencionadas antes, sobre todo el artículo 8, no cabe pensar sino que esas leyes serán muy restrictivas en materia ideológica, vale decir, que solo tendrán autorización para funcionar los medios de comunicación que se abstengan de impugnar la ideología oficial.

Libertad artística. En esta materia, el texto constitucional es todavía más claro. Establece directamente la necesidad de censurar, de una u otra manera, todas esas actividades: "La ley establecerá un sistema de *censura* para la exhibición y publicidad de la producción cinematográfica y

fijará las *normas generales* que regirán la expresión pública de otras actividades artísticas" (art. 19.12 *in fine*).

En síntesis. Como conclusión general, sobre la Constitución chilena habrá que decir, *mutatis mutandis*, algo similar a lo señalado respecto a la cubana. Aquella no reconoce el derecho de expresar sino los pensamientos que se abstengan de cuestionar unos dogmas político-sociales, cuya imposición como fe inexpugnable constituye la tarea fundamental de los gobernantes y de los órganos estatales en general.

(vi) HONDURAS

La Constitución hondureña establece, en sus artículos 72 a 75, las normas generales sobre libertad de expresión del pensamiento. Podría decirse que esa regulación es ejemplar en cuanto a la firmeza y detalle con que procura garantizar tal libertad, si no fuera que el último de dichos artículos echa por la borda la firmeza de las seguridades dadas en los tres anteriores.

Libertad de prensa. Parecería que ella estuviese garantizada de una manera plena, o poco menos, pues se consigna, con prolijidad que no es usual en textos constitucionales, una serie de trabas a eventuales intervenciones contra dicha libertad. Vale la pena reiterar aquí esas disposiciones, que hemos calificado de ejemplares. "Es libre la emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, *sin previa censura*. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por *medios directos o indirectos* restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones" (art. 72). "Los talleres de impresión, las estaciones radioeléctricas, de televisión y de cualesquiera otros medios de emisión y difusión del pensamiento, así como todos sus elementos, no podrán ser decomisados ni confiscados, *ni clausuradas o interrumpidas* sus labores por motivo de delito o falta en la emisión del pensamiento, sin perjuicio de las responsabilidades en que se haya incurrido por estos motivos de conformidad con la ley" (art. 73.1). "No se puede restringir el derecho de emisión del pensamiento por vías o medios *indirectos*, tales como el abuso de controles oficiales o particulares del material usado para la impresión de periódicos; de las frecuencias o de enseres o

aparatos usados para difundir la información" (art. 74).

Continuación. Pero la efectividad de todas estas previsiones para asegurarle una verdadera libertad de difusión a esos medios pierde su importancia, prácticamente, por lo que se establece a renglón seguido: la emisión del pensamiento será regulada por una ley, y esta "podrá establecer *censura previa*, para proteger los *valores éticos y culturales* de la sociedad" (art. 75). El amplísimo margen de indeterminación que caracteriza a la idea de semejantes "valores" hace que, por tal vía, no resulte difícil encontrar excusas para legitimar cualquier contenido de restricciones, incluso las que habían sido descartadas en los artículos anteriores; y para que ellas puedan ser impuestas en forma todavía más irremediable, hasta se admite hacerlas efectivas por medio de "censura previa".

Libertad religiosa. En materia de libertad de cultos, la situación presenta cierta similitud con lo establecido en la Constitución costarricense (*supra*, número iii). Aunque la Constitución de Honduras tiene, sobre esta última, la ventaja de no consagrar ninguna religión oficial, empero no deja de someterlas todas al límite de "que no contravengan las *leyes y el orden público*" (art. 77.1). La restricción más específica —y en eso estriba la principal similitud con Costa Rica— es que a los ministros de todas las religiones se les prohíbe "hacer en ninguna forma propaganda política, invocando motivos de religión o valiéndose, como medio, para tal fin, de las creencias religiosas del pueblo" (art. 77.2). Esto constituye una seria violación de la libertad de expresar los pensamientos, tanto en materia religiosa como política, para esos ministros; y también para la libertad de recepción de ideas por parte de los fieles.

Libertad de enseñanza. Respecto a la libertad de educación, la normativa constitucional es ambigua. En el artículo inicial del capítulo correspondiente, se asigna al Estado, como "función esencial", la de proveer a una "educación... para la conservación, el fomento y difusión de la *cultura*", agregándose que aquella será "laica y se fundamentará en los principios esenciales de *democracia*" (art. 151). Si bien los términos "cultura" y "democracia" representan conceptos indeterminados, en líneas generales no suelen ser de los más aptos para

interpretarlos muy restrictivamente, cuando no vienen acompañados de otros calificativos; y si se tiene en cuenta que dicha educación ha de ser "laica", puede decirse que ese precepto no es favorable a interpretaciones en el sentido de una enseñanza adoctrinante. Sin embargo, en el mismo artículo se agrega que esta educación "inculcará y fomentará en los educandos profundos *sentimientos hondureños* y deberá vincularse directamente con el proceso de *desarrollo* económico y social del país". Tal obligación de "inculcar" ideologías nacionalistas y desarrollistas abre, por cierto, un portón de entrada muy peligroso para el adoctrinamiento; sobre todo si se entendiera que está prohibido dar a conocer, en la enseñanza, las ideas que no concuerden con aquellas ideologías.

Continuación. Por lo demás, en ese articulado se establecen una serie de controles estatales sobre la enseñanza (cf. arts. 156 y sgts.), que pueden ser extremadamente peligrosos si se parte de la base de que ella ha de ser adoctrinante ("inculcará"), en la dirección que fuere. No obstante, por otro lado se establece que "los padres tendrán derecho *preferente* de escoger el tipo de educación que habrán de darle a sus hijos" (art. 152); y también, que "El Estado reconoce y protege la *libertad* de investigación, de aprendizaje y de cátedra" (art. 155). La Constitución es ambigua, decíamos, pues no queda claro si ese *tipo* de educación que escojan los padres puede ser también uno *sin* adoctrinamientos "hondureños" y desarrollistas, y si la libertad de cátedra llega hasta el punto de permitir que sean puestos en duda estos u otros dogmas; o si, en cambio, todo educador —privado o público, y sea del nivel que sea— está obligado a ceñirse a dichas ideologías que la Constitución ordena imponer en las mentes de los educandos.

Extranjeros. Cabe acotar que la Constitución hondureña, también en esto de manera similar a la costarricense, contiene un artículo que podría invocarse para restringir en particular la libertad de expresión de los extranjeros. Señala que estos "no podrán desarrollar en el país *actividades* políticas de carácter nacional ni internacional" (art. 32). Y el artículo 73.3 llega al extremo de prohibir, a quienquiera que no sea "hondureño *por nacimiento*", hasta la posibilidad de ofrecerle una "orientación *intelectual*" a los "periódicos impresos, radiales o televisivos". Por lo demás, se subraya que, de una manera general, a los extranjeros se les podrán

imponer "restricciones" especiales, "por razones calificadas de *orden público, seguridad, interés o conveniencia social*" (art. 31). Que aquellas "actividades" y estas "razones" puedan o no ser interpretadas en el sentido de coartarle a los extranjeros la posibilidad de expresar pensamientos, en definitiva dependerá de las leyes o del gobierno de turno.

En síntesis. La Constitución de Honduras parece más bien inclinarse, de una manera general, hacia una concepción amplia de las posibilidades de que las personas puedan expresar libremente lo que piensan. Sin embargo, contiene también unas formulaciones que podrían legitimar igualmente un intervencionismo intolerante de las autoridades en cualquiera de las esferas de la comunicación de ideas, sobre todo en algunas de ellas.

(vii) MÉXICO

Principio general. El texto constitucional establece el derecho a la libertad de expresión de una manera tal que, aunque afirmado como principio, es susceptible de toda clase de restricciones: "La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la *moral*, los *derechos* de terceros, *provoque* algún delito, o perturbe el *orden público*" (art. 6). Es obvio la anchísima franja de indeterminación que estos conceptos limitativos dejan librada a la apreciación de las autoridades estatales. Por lo demás, como veremos, esa orientación restrictiva de la Constitución mexicana en la materia se pone de manifiesto también en otras disposiciones, que regulan en particular tales o cuales formas de dicha libertad. [Por ejemplo, una de las causales de pérdida de la ciudadanía mexicana es la de "ayudar, en contra de la nación, a un extranjero, o a un gobierno extranjero. . . ante un tribunal internacional" (art. 37.B.V.). Por tanto, a los mexicanos les queda vedado exponer cualquier hecho o idea — aun si es verdad aquel y criteriosa esta — cuando de ello se puede seguir una condena (aunque fuera justa) del Estado mexicano ante un Tribunal internacional; o sea, que aquellos deben abstenerse de efectuar denuncias o aportar testimonio acerca, por ejemplo, de violaciones que su Estado cometa en materia de derechos humanos, si ellas han de ventilarse ante instancias internacionales.]

Libertad de publicación. También a este respecto, el texto comienza por afirmar en principio tal libertad, la cual consigna como "inviolable... sobre cualquier materia" (art. 7 *in limine*). Incluso se prohíbe la previa censura, pero de una manera un tanto ambigua: "Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ...ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a la vida privada, a la *moral* y a la paz pública" (art. cit.). No queda claro si estos "límites" permitirían de todos modos establecer una censura, para protegerlos, o si ellos se refieren a responsabilidades ulteriores; parece que esto lo determinarán las "leyes orgánicas" que se dictarán sobre la materia, respecto a las cuales se señala en particular la necesidad de incluir determinadas garantías para empleados de las empresas editoras (art. 7.2). Por otro lado, se dice que "el derecho a la información será garantizado por el Estado" (art. 6 *in fine*), mas sin aclarar cómo; o sea, que ello quedaría remitido a la ley.

Libertad de enseñanza. La constitución dedica un texto bastante extenso (art. 3) a la cuestión educativa. Señala una serie de criterios —en general bastante vagos y grandilocuentes— respecto a la enseñanza estatal: cf. el acápito y el párrafo I, del artículo indicado.⁴⁷ Por ese lado, sin embargo, no se vería afectada la libertad de enseñanza, ya que, aun en el caso de que dichos conceptos indeterminados (muchos de los cuales hasta son afines a la terminología de los derechos humanos) fueran interpretados en algún sentido dogmatizante, ello no tendría lugar, de una manera forzosa, sino en el ámbito de la educación oficial. Esto si se parte de la base de que se permite también una enseñanza no oficial, la cual no estaría obligada a ajustarse a los mismos requisitos. Mas también a este respecto, el texto constitucional es ambiguo, salvo en cuanto prohíbe tajantemente la intervención religiosa en la enseñanza de ciertos niveles (párrafo IV: *vid. infra*). En efecto, si bien se permite a los particulares "impartir educación en todos sus tipos y grados", se agrega que, "por lo que concierne a la educación primaria, secundaria y normal (y a la de cualquier tipo o grado, destinada a obreros y a campesinos), deberán obtener previamente [los particulares], en cada caso, *autorización expresa* del poder público"; y esta

"podrá ser negada o revocada, sin que contra tales resoluciones proceda juicio o recurso alguno" (párrafo II). Por añadidura, dicha educación deberá "ajustarse, *sin excepción*, a lo dispuesto en los párrafos iniciales I y II del presente artículo [el I es aquel que contiene los criterios para la enseñanza oficial] y, además, cumplir los planes y programas *oficiales*" (párrafo III).

Continuación. Ahora bien, si estas disposiciones quieren decir simplemente que una enseñanza privada que no reúna tales requisitos no será *reconocida* por el Estado —como parece insinuarlo otro párrafo ("V. El Estado podrá retirar discrecionalmente, en cualquier tiempo, el reconocimiento de validez oficial a los estudios hechos en planteles particulares")—, ello no significaría propiamente una negación irremediable de la libertad de enseñanza, pues a nadie se le *prohibiría* enseñar o aprender fuera del círculo de la ideología estatal. Pero si, en cambio, no solo se le niega validez oficial a la enseñanza que no se ajuste a "los planes y los programas" del Estado, sino que incluso se *prohíbe* que ella pueda llevarse a cabo, el peligro de un adoctrinamiento "sin excepción" en los referidos niveles educativos puede hacerse muy real.

Libertad religiosa. La Constitución mexicana es más bien hostil a las religiones. Eso llega a traslucirse hasta en el vocabulario que emplea para referirse al punto: por ejemplo, dice que "La ley no reconoce personalidad alguna a las *agrupaciones* religiosas *llamadas* iglesias" (art. 130.5). No obstante, reconoce la libertad de profesar cualquier creencia religiosa y de practicar "los actos del culto respectivo... siempre que no constituyan delito o falta penados por la ley" (art. 24.1). Y queda establecido que "El Congreso no puede dictar leyes estableciendo o prohibiendo religión cualquiera" (art. 130.2). Pero se señala, asimismo, que el Estado ha de "ejercer en materia de culto religioso y disciplina externa la *intervención* que designen las leyes" (art. 130.1); por lo demás, "Los ministros de los cultos serán considerados como personas que ejercen una profesión y estarán *directamente* sujetos a las leyes que sobre la materia se dicten" (art. 130.6). Aquella "intervención" podría referirse, por ejemplo, a la circunstancia

47. Esos textos tienen, si bien se mira, contenido y "tono" bastante análogos a ciertos preámbulos constitucionales: cf., por ejemplo, el de las Constituciones de Perú y Venezuela (*supra*, cap. III, Ap.: viii y x, ambos *in limine*).

de que las prácticas religiosas no están autorizadas para llevarse a cabo si no es "*dentro* de los templos" o en el "domicilio particular" del creyente; y dichos templos "estarán siempre bajo la vigilancia de la autoridad" (art. 24; cf. también art. 130.10). Incluso, el Estado tiene la "facultad de determinar, según las *necesidades* locales, el *número máximo* de ministros de los cultos", y se exige que todos estos sean mexicanos por nacimiento (art. 130, incs. 7 y 8).

Continuación. Las organizaciones religiosas, así como en particular sus ministros, están sujetas a una serie de restricciones en su libertad de expresión. Unas y otras, e inclusive "las asociaciones o sociedades ligadas con la propaganda de cualquier credo religioso, no intervendrán *en forma alguna* en planteles en que se imparta educación primaria, secundaria y normal y la destinada a obreros o a campesinos" (art. 3.IV). Especialmente severa es la prohibición de intervenir en materia política. "Los ministros de los cultos nunca podrán, en reunión pública o privada, constituida en junta, ni en actos del culto o de propaganda religiosa, hacer la *crítica* de las leyes fundamentales del país, de las autoridades en particular, o en general del gobierno" (art. 130.9). "Las publicaciones periódicas de carácter confesional, ya sean por su programa, por su título o simplemente por sus *tendencias* ordinarias, no podrán *comentar* asuntos políticos nacionales, ni *informar* sobre actos de las autoridades del país, o de particulares, que se relacionen directamente con el funcionamiento de las instituciones públicas" (art. 130.13; *vid.* también el inciso que sigue).

Extranjeros. Si la Constitución costarricense y la hondureña simplemente autorizan que a los no nacionales se les pueda negar la libertad de palabra en temas de "política" (*supra*, iii y vi), la Constitución mexicana es completamente inequívoca y hasta imperativa al respecto: "Los extranjeros no podrán de *ninguna* manera *inmiscuirse* en los asuntos políticos del país" (art. 33.2).

En síntesis. Puede decirse que, en líneas generales, la Constitución de México mira con mucho recelo las libertades de expresión del pensamiento. Aunque las afirma como un principio, las rodea —particularmente en algunas esferas o para ciertas clases de personas— de tantas prohibiciones o posibilidades de restricción, que el ámbito de su

legítimo ejercicio queda (o puede quedar) muy disminuido, si no anulado.

(viii) PERÚ

Disposiciones generales. La constitución peruana es, entre las que estamos examinando, tal vez la más amplia en materia de libertades de expresión del pensamiento. Las restricciones allí son mínimas. Así, como principio general establece que "*Toda* persona tiene derecho: . . . A las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra, el escrito o la imagen, por *cualquier* medio de comunicación social, *sin previa autorización, censura ni impedimento algunos*, bajo las responsabilidades de ley" (art. 2.4.1); e incluso hay un "derecho de rectificación gratuita", para cualquier "persona afectada por afirmaciones inexactas o agraviadas en su honor por publicaciones" (art. 2.5). Igualmente, se reconoce la "libertad de creación intelectual, artística y científica" (art. 2.6). También se establece la plena libertad de cultos; pero esto con la reserva de que, si se trata del "ejercicio público" de ellos, "es libre siempre que no ofenda a la *moral* o altere el *orden público*" (art. 2.3).

Continuación. Para reforzar todo lo anterior, particularmente en relación con la libertad de prensa, se consigna que "es *delito* toda acción que *suspende* o *clausura* algún órgano de expresión o le impide circular libremente" (art. 2.4.3). Se subraya, también, que cualquiera puede, si así lo desea, "guardar reserva sobre las convicciones políticas, filosóficas y religiosas o de cualquier otra índole" (art. 2.17).

Libertad de enseñanza. Los siguientes preceptos afirman el *pluralismo* en materia educativa: "El Estado reconoce y garantiza la libertad de enseñanza" (art. 21 *in fine*); "La educación religiosa se imparte sin violar la libertad de conciencia. Es determinada *libremente* por los padres de familia" (art. 22.2); "El Estado garantiza a los padres de familia el derecho de intervenir en el proceso educativo de sus hijos y de *escoger* el tipo y centro de educación para éstos" (art. 23); "El Estado garantiza la libertad de cátedra y rechaza la *intolerancia*" (art. 31.2 *in limine*). Sin embargo, hay también algunas disposiciones que pueden entrañar cierto peligro para la libertad de enseñan-

za, llevar a imponer algún adoctrinamiento, prohibir que se conozcan algunas ideologías. En efecto, el texto constitucional dice que: la educación "Se inspira [¿obligatoriamente?] en los principios de la *democracia social*" (art. 21.2); "La formación *ética y cívica* [conceptos indeterminados!] es *obligatoria en todo el proceso educativo*" (art. 22. 2 *in limine*); "La enseñanza, en *todos* sus niveles, debe impartirse con *lealtad* a los principios constitucionales y a los fines de la correspondiente institución educativa" (art. 28). Todas estas son "válvulas" por las cuales podría infiltrarse, justamente, aquella "intolerancia" que se afirmaba querer "rechazar";⁴⁸ así, con respecto a la llamada "lealtad a los principios constitucionales", se conoce las consecuencias a que ello ha dado lugar, por ejemplo, en Alemania Federal (*Berufsverbot*, etc.).

Continuación. La Constitución peruana presenta la singularidad de establecer como *obligatoria* la enseñanza de los derechos humanos: "La enseñanza sistemática de la Constitución y de los derechos humanos es obligatoria en los centros de educación civiles y militares y en *todos* los niveles" (art. 22.3). Se podría preguntar si no sería, también *esta* enseñanza, una forma de adoctrinamiento. Podría serlo, desde luego, pero no es indefectible que lo sea.⁴⁹

En síntesis. Puede estimarse que la Constitución peruana ofrece, al menos para tiempos en donde *no* se apliquen sus regímenes de excepción, un aceptable grado general de consagración de la libertad de expresión del pensamiento. Y si hacemos abstracción de algunas de esas disposiciones un tanto "peligrosas" que ella contiene en punto a ciertos aspectos de la enseñanza, incluso podría decirse que dicha Constitución podría servir de ejemplo, en aquella materia, para la generalidad de los textos constitucionales en América Latina.

(ix) URUGUAY

Principios generales. La Constitución uruguaya de 1967 es de las más liberales del Continente.

Su orientación básica, en cuanto a libertad de expresión, está contenida en el siguiente precepto: "Es *netamente* libre en *toda* materia la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por *cualquier* otra forma de divulgación, *sin necesidad de previa censura*; quedando responsable el autor y, en su caso, el impresor o emisor, con arreglo a la ley, por los *abusos* que cometieren" (art. 29). Aun cuando el giro "sin *necesidad* de previa censura" no constituye una manera muy feliz de decir, según cabe entenderlo, que *no está permitida* ninguna censura *previa*, el contexto de este artículo es lo suficientemente neto como para que dicha fórmula haya sido siempre interpretada de esa manera justamente. La referencia a la responsabilidad ulterior por "abusos", aunque constituye por cierto una remisión muy indeterminada a lo que en la materia disponga el legislador, no se ha podido evitar en ninguna Constitución, ni siquiera en las más liberales.

Libertad religiosa. Se halla establecida en una forma tan concisa como irrestricta: "*Todos* los cultos religiosos son libres en el Uruguay. El Estado no sostiene religión *alguna*" (art. 5 *in limine*). Nótese que ni siquiera se dice, en este artículo (que es el único referido específicamente al punto), que esos cultos estén sometidos a las limitaciones que corrientemente les señalan los textos respectivos de las otras Constituciones: "orden público", "buenas costumbres", etc.; tampoco se menciona ninguna "inspección", "control", etc. Desde luego, el contexto general de la Constitución permitiría, de todos modos, aplicarles aquellas limitaciones, en una interpretación sistemática con otros artículos. Sin embargo, el hecho de que dichos conceptos indeterminados no se mencionen expresamente en aquel precepto, constituye una buena pauta en el sentido de que el constituyente uruguayo ha querido asegurarle la *máxima* libertad posible a todas las religiones. (Por supuesto, no sería posible prohibirle a las congregaciones religiosas ni a sus ministros el intervenir en polí-

48. Comentario.

"Hay toda una disquisición, con la cual no estoy de acuerdo. Porque, en primer término, 'democracia social' fue un pedido de la izquierda en la Asamblea Constituyente, pues dijeron, justamente: 'no queremos la democracia formal, sino democracia social', o sea, la más avanzada. El texto dice, después: 'La formación ética y cívica: conceptos indeterminados. . .'. ¡Claro que son indeterminados! Pero, ¿qué otra cosa han de ser? Y agrega: 'es obligatoria en todo el proceso educativo'. ¡Pero por supuesto! ¿Por qué no va a serlo? ¡Siempre lo ha sido! Y continúa: 'todas estas son "válvulas" por las cuales podría infiltrarse la intolerancia. . .'. No lo creo. Me parece que en todo esto hay una pura disquisición, que parece rebuscada, innecesaria" (GARCÍA B.).

49. Comentario.

"No creemos que sea adoctrinamiento. . ." (GARCÍA B.): cf. *infra*, § 104. I (Discusión).